

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 9º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-32824-2019
CARATULADO : SILVA/FISCO DE CHILE/CDE

Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En presentación de 18 de noviembre de 2019 comparece el abogado Nelson Guillermo Caucoto Pereira, en representación de don Cristián Salvador Silva Olguín, domiciliados en calle Doctor Sotero del Río N°326, oficina 1.104, comuna de Santiago, demandando de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile, presentado legalmente por doña María Eugenia Manaudo Tapia, abogada, con domicilio en calle Agustinas N°1.687, comuna de Santiago, por la suma \$200.000.000 más intereses, reajustes y costas.

El demandante es hijo del ejecutado político don Ricardo Cristian Silva Soto, asesinado por la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 15 de junio de 1987, en una operación conocida como "Operación Albania". Esto ocurrió como represalia a los ataques del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) contra Augusto Pinochet.

Varios miembros del FPMR fueron detenidos por la CNI el 15 de junio de 1987. Inicialmente, se consideró interrogar a los detenidos, pero la orden de eliminarlos fue dada por Álvaro Corbalán, un alto oficial de la CNI.

Los detenidos fueron trasladados a una casa abandonada en la calle Pedro Donoso. Los oficiales de la CNI designaron a oficiales para ejecutar a cada uno de los detenidos. La orden de disparar se dio lanzando una piedra en el techo, mientras otros agentes disparaban al aire para simular un enfrentamiento. Los siete miembros del FPMR fueron ejecutados y el capitán Francisco Zúñiga remató a cada una de las víctimas.

En un informe posterior de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se concluyó que las víctimas no murieron en un enfrentamiento, como se afirmó oficialmente, sino que fueron ejecutadas por agentes del Estado en violación de sus derechos humanos.

El demandante tuvo que soportar durante todos esos años el injusto tratamiento del Estado de Chile. El daño que se le ha infringido es incalculable y ello constituye una situación que, en un régimen de Estado de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QNMHXXBSMQW

derecho democrático, no estaba obligado a soportar. El demandante fue obligado injustamente por el Estado chileno a crecer y desenvolverse en la vida con el trauma de su padre ejecutado impunemente por agentes estatales.

Los hechos relatados y comprobados por las investigaciones judiciales, por organismos de Derechos Humanos y por las comisiones de verdad oficiales del Estado, configuran un crimen de lesa humanidad que hasta el día de hoy le afecta en su calidad de hijo de la víctima, que aún le provoca daño moral, familiar, afectivo y psicológico. Estos espantosos hechos cometidos en contra de Ricardo Cristian Silva Soto marcaron de manera determinante la vida del demandante. La Dictadura Militar y su terrorismo de Estado lo obligaron a crecer sin un padre, provocándole un inabarcable daño moral. Este crimen aún provoca sentidos daños morales al haber el Estado chileno, hecho desaparecer de manera brutal a su familiar. La vida de su familia completa resultó afectada y particularmente la de él como hijo.

Los hechos relatados encuadran en un crimen de lesa humanidad. En el ámbito del derecho internacional, los hechos relatados en el caso se consideran crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes son ampliamente reconocidos por la comunidad internacional como atroces e intolerables para la humanidad. Esta calificación se basa en el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 1945, respaldado por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 y actualizado con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998.

La existencia de un marco normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional es esencial para determinar la responsabilidad del Estado de Chile en este caso. La jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago establece que es fundamental identificar el origen de la acción presentada por los actores y determinar la naturaleza del delito, que ha sido calificado como un "crimen contra la humanidad o de lesa humanidad" tanto por la doctrina penal nacional como internacional.

El análisis de la responsabilidad del Estado se fundamenta en la Constitución Política de la República de Chile. El artículo 38 inciso 2º de la Constitución establece que cualquier persona que sea perjudicada en sus derechos por el Estado puede presentar una reclamación ante los tribunales



de justicia, lo que constituye una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos estatales cuando causan daños a personas, ya sean naturales o jurídicas.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile respalda esta responsabilidad del Estado, que se deriva de la naturaleza de su actividad como organización jurídica y política que debe cumplir sus deberes y fines según la Constitución. Esto implica que las distintas responsabilidades que puedan surgir de las acciones del Estado se rigen por normas y principios del derecho público. La base de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado se encuentra en disposiciones constitucionales, supraconstitucionales y legales, todas ellas relacionadas con el derecho público. Además, se enfatiza que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, lo que se refleja en los principios fundamentales que guían el ejercicio de la soberanía y el respeto a los derechos esenciales de la naturaleza humana.

En el contexto del derecho internacional, las normas y principios que rigen la responsabilidad del Estado no hacen más que reflejar lo que se ha desarrollado a nivel internacional durante más de un siglo. Conceptos como el bien común, la superioridad de la persona sobre el Estado y la dignidad humana como límite a la soberanía estatal son parte integral del corpus iuris internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos, de los cuales Chile es parte.

Chile ha asumido una serie de obligaciones progresivas a nivel internacional a través de declaraciones, convenciones, votos en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, así como mediante la adhesión a la costumbre internacional y principios generales del derecho reconocido por naciones civilizadas. Estas obligaciones se relacionan con el "respeto de los derechos esenciales del hombre" por parte de los Estados, como se refleja en varios instrumentos internacionales, incluyendo la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



Este complejo marco normativo, conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha modificado la configuración de la responsabilidad estatal, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos. En este contexto, los Estados tienen una obligación de resultado, es decir, deben garantizar la efectiva vigencia de los derechos y libertades establecidos en los instrumentos internacionales. La responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos se considera objetiva, lo que significa que se produce cuando el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, independientemente de la existencia de falta o culpa por parte del agente que comete el acto.

La Constitución Política de la República de Chile refuerza esta interpretación al asegurar que "La Constitución asegura a todas las personas". Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, y el artículo 19 de la Constitución garantiza la igual repartición de las cargas públicas, lo que significa que nadie está obligado a soportar una carga que no haya sido establecida por la ley, incluso en aras del bien común, según la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Señala la demandante que la aplicación de las normas y principios del derecho privado, en particular las contenidas en el Código Civil, no es apropiada ni procedente en casos de responsabilidad del Estado por crímenes de lesa humanidad. Esta inaplicabilidad la fundamenta en varios argumentos:

El Código Civil y las reglas del derecho de daños se basan en premisas y principios diferentes a los del derecho público y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En un caso de violaciones de derechos fundamentales, el derecho privado se centra en relaciones entre partes en conflictos de naturaleza privada, como las relaciones contractuales y de propiedad. Por lo tanto, aplicar estas normas al ámbito de los derechos humanos sería un error de lógica y sistemática jurídica.

La responsabilidad estatal en casos de violaciones a los derechos humanos es significativamente diferente de la responsabilidad por daños civiles, esto fue argumentado por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Loayza Tamayo, señalando que el derecho



privado se enfoca en asuntos patrimoniales y de interés privado, el derecho público y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos están destinados a proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas. Por lo tanto, los criterios de determinación de las reparaciones, basados en conceptos de daño material y daño moral, no son adecuados ni suficientes para abordar violaciones de derechos humanos.

La Corte Interamericana a su vez se ha pronunciado sobre los conceptos jurídicos, al ser productos de su tiempo, han evolucionado y se han adaptado a las necesidades y valores de la sociedad. La aplicación de conceptos del derecho privado, como daño material y daño moral, al derecho internacional de los derechos humanos resulta inapropiada porque estos conceptos están arraigados en intereses patrimoniales y no reflejan adecuadamente la importancia de la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Las normas del Código Civil, en su mayoría, fueron diseñadas en un contexto en el que los principales riesgos y daños se derivaban de asuntos relativamente triviales, como accidentes causados por personas ebrias, adolescentes con mala educación, edificios en ruinas o animales sueltos. Estas normas no fueron concebidas para abordar situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos llevadas a cabo por el Estado.

La imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, lo fundamenta en los siguientes argumentos:

Dado que los casos de violaciones a los derechos humanos son asuntos de carácter público e internacional, es fundamental reconocer la autonomía y particularidad del conjunto normativo de los derechos humanos. Esto significa que las normas aplicables no son meramente privadas sino que responden a un marco normativo específico.

En una sociedad democrática y respetuosa de las libertades individuales, los ataques y daños causados por agentes del Estado contra los derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, resguardados por los artículo 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por los N°1 y 7 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, exigen una respuesta de reparación.



La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Chile, establece claramente el deber de reparar que recae sobre un Estado que ha violado los derechos humanos. Esto implica que el Estado debe tomar medidas para reparar el daño causado a las víctimas y cumplir con esta obligación en virtud del derecho internacional.

Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece explícitamente la imprescriptibilidad de las acciones civiles, los principios generales del Derecho y la jurisprudencia internacional respaldan esta noción. Además, se hace referencia a resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y principios que sugieren que las acciones civiles relacionadas con violaciones de derechos humanos no deben prescribir.

El deber de reparación se considera una obligación compleja e indisoluble que incluye la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación adecuada a las víctimas. Este deber no debería estar sujeto a prescripción y se aplica de acuerdo con los principios pro homine, progresividad y congruencia del derecho internacional de los derechos humanos.

La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Chile sobre casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad se destaca por declarar la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de crímenes de lesa humanidad y desestimar excepciones. A continuación, se mencionan algunos de los fallos relevantes: "García Guzmán Luis y Otros" Caso Liquiñe, Rol de Ingreso Corte Suprema N° 4662-2007, "Sanhueza Luis y Otros," Rol de Ingreso Corte Suprema N° 6308-2007, "Arellano Stark y Otros" Caso Caravana de la Muerte, Rol de Ingreso Corte Suprema N° 4723-2007, "Ofelia de la Cruz Lazo," Rol de Ingreso Corte Suprema N° 6212-2007, "Contreras Sepúlveda Juan Manuel y Otros" "Episodio Tormen," Rol de Ingreso Corte Suprema N° 3907-2007, "Secuestro de David Urrutia Galaz," Rol de Ingreso Corte Suprema N° 4691-2007, "Secuestro de Darío Miranda, Jorge Solovera y Enrique Jeria," Rol de Ingreso Corte Suprema 695-2008, "Moreno Mena y otros" Episodio Pitrufquén, Rol de Ingreso Corte Suprema 5233-2008.



Estos casos ejemplifican la jurisprudencia que ha establecido la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad y han rechazado excepciones planteadas por el Estado de Chile para evitar la indemnización de los familiares de las víctimas.

Respecto al daño provocado y el monto de indemnización:

En este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que, como hijo de Ricardo Cristian Silva Soto, le ha tocado soportar a mi mandante. La dolorosa situación a la que se ha visto enfrentado configura un claro daño moral que -según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional- amerita ser reparado a través de una indemnización.

Se cita doctrina nacional, que caracterizan el daño moral como un menoscabo en los atributos morales o espirituales de una persona, incluyendo dolor, pesar, molestias psíquicas y sufrimiento moral o físico. También se menciona la idea de que la indemnización del daño moral tiene una función compensatoria, haciendo la vida más llevadera para quien ha sufrido una carga significativa.

Se hace referencia a sentencias judiciales de tribunales chilenos que establecen que el daño moral es una lesión de derechos personales y no requiere una prueba específica en el juicio, siempre que el hecho ilícito que lo causó esté probado. Se argumenta que la intensidad del daño moral es obvia en ciertos casos, como la pérdida de un ser querido, y, por lo tanto, no requiere pruebas adicionales.

Se sostiene que este enfoque en la jurisprudencia chilena es consistente con la jurisprudencia internacional, como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también considera que el daño moral no requiere prueba en el tribunal.

Solicita en definitiva se condene a la demandada a pagar la suma total de \$200.000.000, a la demandante, más intereses y reajustes legales, con costas.

En presentación de 13 de febrero de 2020 la parte demandada contestó la demanda interpuesta en su contra, solicitando su rechazo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QNMHXXBSMQW

En primer término opone la excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Señala que el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los derechos humanos se posiciona dentro de la llamada “justicia transicional”.

Agrega que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de la justicia por tantos años buscada. Lo anterior pues los procesos penales se concentran en el castigo a los culpables, no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Desde la perspectiva del Estado, estas importan una compleja decisión de mover recursos económicos públicos desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos y este concurso de intereses se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación, los que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

En el caso chileno, el gobierno de Patricio Aylwin se abocó preferentemente a una serie de objetivos de justicia transicional, entre los cuales estaba la provisión de reparaciones para los afectados. La Comisión Rettig en dicho sentido propuso una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Su informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso y que derivó en la Ley N°19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en cuyo mensaje se consignó en términos generales que se buscaba “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

En lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el Ejecutivo siguiendo el Informe de la comisión, entendió por tal "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la



sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Asumida esta idea reparatoria, la Ley N°19.123 y las demás normas conexas (como la Ley N°19.992 referida a víctimas de tortura) han establecido distintos mecanismos mediante los cuales concretar esta compensación, exhibiendo cómo nuestro país ha afrontado el complejo escenario de justicia transicional.

Al efecto, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha hecho principalmente a través de tres tipos de compensación: transferencias directas de dinero; asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, simbólicas. Todas ellas buscan la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En cuanto a las transferencias directas de dinero, estas se han establecido a través de diferentes leyes, las que han significado al Estado altos costos generales, los que detalla en cuanto a pensiones por Comisión Rettig y Comisión Valech, bonos, desahucio y bonos extraordinarios, las que a diciembre de 2015 significaron el desembolso por parte del Fisco de \$706.387.596.727.

Desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual también es una forma de reparar un perjuicio actual. La sucesión de pagos por la vida del beneficiario no obsta a que pueda ser valorizada para conocer su alto valor compensatorio. Estas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige, obteniéndose compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Sobre las reparaciones específicas, da cuenta que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley 19.123 y sus modificaciones.

Respecto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.

La ley 19.123 ha incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas de DDHH los siguientes derechos:



Todos los familiares del causante tendrán el derecho de recibir de manera gratuita las prestaciones médicas incluidas en el Régimen General de Garantías en Salud y las derivadas de embarazos. En general este tipo de beneficios han sido agrupados en el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2015, el programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.718.319¹. Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.

Los hijos de los causantes que sean alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, sin aporte fiscal, y reconocidos por el Ministerio de Educación, tendrán un derecho al *pago de la matrícula y del total del arancel mensual* de cada establecimiento.

Asimismo, parte importante de la reparación por daño moral causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo, acciones que pretenden reparar a través de la satisfacción a las víctimas que en parte logre reparar el dolor y tristeza y con ello reducir el daño moral.

¹ Dicho Programa contó como presupuesto anual para el año 2006 la cantidad de M\$2.599.993.-; año 2007: M\$2.793.056.-; año 2008: M\$2.946.373.-; año 2009: M\$3.129.045.-; año 2010: M\$3.233.773.-; año 2011: M\$3.340.493.-; año 2012: M\$3.294.116.-; año 2013: M\$4.447.465.- y para el año 2014: M\$4.580.892.- (http://prais.redsalud.gob.cl/?page_id=34)



La doctrina se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente es dar a la víctima una ayuda o auxilio que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

En este sentido, se han ejecutado diversas obras de reparación simbólica: la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en 1993, el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el que se conmemora el 30 de agosto; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros que detalla.

De lo expresado puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional y han provisto indemnizaciones acordes con la realidad económica nacional que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, morales y patrimoniales.

Por eso, las indemnizaciones solicitadas en autos y el cúmulo de reparaciones que aludió, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. No procede por tanto, compensar dichos daños nuevamente. Así se pronunció la Corte Suprema en el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, Rol 4.753-2001, lo que reiteró en fallo de 30 de enero de 2013.

Agrega que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos chilena, al punto de denegar otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos pagados por el Estado por pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Así por ejemplo en el Caso Almonacid con Chile.

Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas, que no genere desigualdades. En igual sentido, Lira da cuenta de lo problemático de dar lugar nuevamente a demandas de indemnizaciones de perjuicios, lo que genera un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la



decisión política y administrativa de reparación. El rechazo a estas pretensiones fortalece los programas de justicia transicional.

En cuarto término, opone la excepción de prescripción extintiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el artículo 2497 del mismo texto.

Conforme al relato efectuado, la detención y desaparición de su padre ocurrió en el mes de abril de 1975.

Entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 27 de enero de 2020, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio, en caso que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Agrega que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que no existe en este caso.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin texto constitucional o legal expreso, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil y en especial las de su Párrafo I que la consagran se han estimado siempre de aplicación general y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del Código Civil, que manda a aplicar estas normas de prescripción a favor y en contra del Estado.



Luego, cabe destacar que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Finalmente, añade que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil en cuanto a la prescripción. Lo habría si aquellos textos la prohibieran o si el derecho interno no admitiera la reparación judicial oportunamente formulado. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Posteriormente, refiere sentencia de unificación de jurisprudencia de demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, de 21 de enero de 2013, autos Rol 10.665-2011, en la cual se dispuso que:

- El principio general que debe regir en la materia es el de prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad como toda excepción, debe ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

- Los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil, sino solo relativa a la responsabilidad penal.

- No existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que se representa en este caso por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, artículo 2332 que fija un plazo de 4 años desde la perpetración del acto.

- Que no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la



acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño.

Sobre el contenido patrimonial de la acción indemnizatoria que se ejerce, agrega que se debe aplicar las normas del Código Civil sobre prescripción, dado que lo pretendido es el ejercicio de una acción que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado.

Aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que dicha acción sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, ninguno de los que la contraria cita contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíban la aplicación del derecho interno en esta materia, lo que ha sido reiterado por la Corte Suprema en los autos Rol 1.133-06, caratulados “Neiva Rivas, Gloria con Fisco de Chile”.

En consecuencia, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos debidamente incorporada al ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, no puede tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad en materia penal, por lo que debe rechazarse la demanda de autos, al encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de lo anterior, formula las siguientes alegaciones sobre la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido:

Sobre el daño moral, cabe considerar que este consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obran en autos en la etapa probatoria.

Los daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.



Por ende, su indemnización no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Es en esta perspectiva que hay que regular el monto de la indemnización, que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

No resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o demandado para fijar la cuantía de la indemnización.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del obligado al pago. Las cifras pretendidas en autos resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los tribunales en esta materia.

En subsidio, alega que en todo caso la fijación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el actor, conforme a las leyes de reparación que señaló, que seguirá percibiendo a título de pensión, como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, todos los que buscan reparar el daño moral.

De no accederse en estos términos, se produciría un doble pago por un mismo hecho.

Hace presente que los reajustes solo pueden devengarse en caso que la sentencia que se dicte acoja la demanda y establezca esa obligación, además de que se encuentre firme y ejecutoriada. Con anterioridad a ello, ninguna obligación de indemnizar tiene su parte, por lo que no hay suma que deba reajustarse.

Sobre los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

En la presentación de 27 de febrero de 2020, se evacúa réplica.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QNMHXXBSMQW

Respecto a la afirmación del demandado de que los demandantes ya han sido satisfechos por los programas de reparación, asocia la demandante esta alegación a la afirmación de que los programas de reparación tenían la naturaleza jurídica de un pago, por tanto, tuvieron por efecto tuvieron por efecto el extinguir las acciones indemnizatorias de las víctimas y sus familias.

Respecto a esto señala que las medidas para subsanar los perjuicios sufridos por las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos no tiene por objeto el extinguir la responsabilidad del Estado.

Los programas de reparación en países que han sufrido dictaduras, guerras, y crímenes graves contra la humanidad se insertan en la necesidad de que los Estados satisfagan las obligaciones que han concertado en el plano internacional de prevención, sanción y reparación, que en el particular se encuentra establecidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En relación a las fuentes del derecho aplicables al caso y la prescripción de la acción.

Argumenta en contra de la afirmación de que la única regulación de la responsabilidad estatal se encuentra en el Código Civil, destacando la importancia de las normas constitucionales, administrativas e internacionales en este contexto.

El caso "Caro con Fisco de Chile" y "Bustos con Fisco" se citan como ejemplos de cómo la responsabilidad del Estado se basa en normas específicas y no solo en el Código Civil. Se argumenta que la defensa del demandado es incorrecta al tratar el litigio como un asunto de derecho privado, ya que históricamente se han invocado poderes exorbitantes de la Administración en otros casos.

Además, se sostiene que la doctrina de los actos propios y la buena fe deben guiar las defensas en estos casos. Se destaca que la acción de responsabilidad del Estado en casos de violaciones de derechos humanos no prescribe, ya que se basa en el artículo 38 de la Constitución Política de la República de Chile y las normas internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La demandante cito jurisprudencia que respalda la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de violaciones de derechos humanos cometidas



por el Estado, citando ejemplos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Apelaciones de Santiago.

Respecto al monto de lo demandando, sobre cifras, hemos señalado las que hemos indicado pues una demanda indemnizatoria nos exige pretensiones concretas. No hay dinero que supla el dolor experimentado por el demandante. Parece hasta de mal gusto tener que justificar el peso que se solicita, como de peor gusto cuestionarlo.

En presentación de 13 de marzo de 2020 consta dúplica, reiterando los argumentos expresados en el escrito de contestación.

Por resolución de 1 de abril de 2020 se recibió la causa a prueba.

Por resolución de 10 de abril de 2023 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el ajusticiamiento de personas ha sido catalogado como un crimen de lesa humanidad, esto es, están dirigidos a afectar la vida misma de las personas en su aspecto más básico y trascendente, del cual los países, entre los que se encuentra Chile, se han comprometido a evitar y, una vez producidos, sancionar. Siendo este caso de particular gravedad ya que fue cometido por agentes del Estado.

SEGUNDO: Que a fin de acreditar su pretensión, la parte demandante acompañó la siguiente prueba documental:

- certificado de nacimiento de don Cristian Salvador Silva Olguín, hijo de don Ricardo Cristian Silva Soto;

- y, - certificado emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el que consta la calidad de víctima calificada de violaciones a los derechos humanos de don Ricardo Cristian Silva Soto.

TERCERO: Que además rindió prueba testimonial, consistente en las declaraciones de los siguientes testigos:

- Roberto Alex Quintana Baltierra, quien manifestó que era amigo del padre del demandante y fue testigo presencial de los hechos dramáticos que llevaron a su asesinato, por lo cual pudo constatar, de forma directa y también por relatos de familiares, el impacto emocional, conductual y en muchos casos físicos que estos hechos le causaron, así como las dificultades que enfrentó en su vida escolar y en su adolescencia. Cuando visitaba a la



viuda de su amigo, vio que mantenía una actitud a veces de mutismo, de aislamiento y en el tiempo del dolor que seguía manifestando, a veces de manera tácita y otras de manera explícita, por lo que puede decir que se vio afectado en su desarrollo emocional. El demandante tenía 4 años cuando Ricardo fue asesinado. En el ámbito escolar presentó problemas de conductas, de suspensiones, eventuales expulsiones de colegio, básicamente por mala conducta y por mal rendimiento. En la vida adulta, la pena y el dolor afloraba en los momentos en que se reencontraban y hablaban de Ricardo y de los hechos. Lo vio muchas veces decepcionado, con una suerte de desazón por lo que le había tocado vivir a él y a su familia.

- Christian Rafael Montenegro Lagos, quien señaló que conoce al demandante desde el año 2011 o 2012 y trabajan juntos hace unos 5 años. Lo conoció en un acto conmemorativo del fallecimiento de su padre, llorando en público sobre un escenario por la memoria de su padre. A lo largo del tiempo ha tenido la oportunidad de conversar con el demandante en diferentes ocasiones, respecto de lo que ha sentido y pasado por la muerte de su padre, lo ha visto afectado, en rechazo emocional, lo que le ha dado noción real de ciertas formas de ser aquel, en su alejamiento, su personalidad y su distancia social. Una vez, en una fiesta de amigos donde se encontraron, estaban tocando guitarra y cantaron una canción que a él le recordó a su padre y rompió en llanto, quedando todos helados. Después le contó que siempre que recuerda esa canción, no puede aguantar el llanto.

También ha visto cómo es la relación del demandante con su hijo, la que se ve mermada porque muchas veces no sabe cómo ser papá, le ha planteado que ser papá para él, es algo que siempre se transforma en algo complicado, en algo medio doloroso, porque le gustaría saber qué hacer y decirle a su hijo ante la ausencia de la palabra de su papá. Recuerda que en un día del padre, le dijo intenta recordar a tu padre y él le dijo que no puede, que hay una negación, que le cuesta hacerse la idea de cómo recordar a su padre, se puso a llorar y se descompensó un poco.

El demandante es un hombre bien completo, pero hay momentos en que se quiebra por completo, o sea, el tema de su padre siempre es una situación frágil, las fechas conmemorativas de su muerte, le afectan demasiado, donde está más retraído esos días. Además, tiene una



personalidad bien limítrofe, hay momentos en los cuales se encuentra más bien regulado, en otros momentos se le ve más descompensado, ha abusado en muchas ocasiones de alcohol y drogas, buscando un poco la paz como él se lo ha dicho.

Cristian sufre de hipertensión, se medica de manera constante, es un fumador compulsivo, cuando está muy ansioso tiende a fumar mucho y eso ha sido parte de su proceso, la hipertensión que afecta a Cristian muchas veces lo ha descompensado, ha tenido que retirarse del trabajo y ha tenido que ir al médico, a urgencias para ir a regularse. Yo llevo trabajando junto con él aproximadamente unos 5 años, y al menos en dos ocasiones por tema de su hipertensión ha tenido que ir a urgencias desde el trabajo, lo hemos tenido que ir a dejar en el vehículo de la empresa, simplemente, estaba descompensado.

Cristián le ha relatado en varias ocasiones que la situación de su papá es algo que lo afecta, que lo ha hecho vivir una vida al límite. En alguna oportunidad tomó la decisión de viajar durante 1 año buscando básicamente respuestas espirituales, buscándose a él mismo y escapando también de la realidad.

- Mauricio Eduardo Aliaga Torres, quien indicó que conoce al demandante del año 1989 aproximadamente y desde esa época hasta el año 1997 fueron vecinos, jugaban juntos. Presenció ciertas situaciones donde veía a Cristián con algunas actitudes rebeldes ante situaciones normales de infancia. No tenía una buena relación con su madre, él no le hacía caso respecto a ciertas guías que su mamá le daba, era muy ensimismado en ciertas ocasiones, no se incorporaba en los juegos. Tenía problemas de sociabilidad en el colegio, no se incorporaba regularmente a los juegos con sus amigos, siempre muy ensimismado. Entrando a la adolescencia perdieron contacto, porque él se cambió de casa. De todas maneras lo seguía visitando y él ya en esa etapa comenzó con algunas otras actitudes que eran de rebeldía ante la vida, tenía una visión de rechazo ante la sociedad y ante la vida en general, tenía actitudes muy desafiantes, consumo problemático de alcohol y drogas. Él estaba viviendo un mundo paralelo, no se incorporaba a los juegos de niños y luego a las dinámicas de adolescente.



CUARTO: Que por su parte la demandada acompañó respuesta de oficio del Instituto de Previsión Social, de 14 de febrero de 2020, informando sobre los beneficios de reparación Ley N°19.123 recibidos por el demandante, equivalentes a la suma de \$11.101.351.

QUINTO: Que no se ha objetado que el demandante sea hijo de don Ricardo Cristian Silva Soto, lo que además consta en el certificado de nacimiento acompañado en la demanda.

SEXTO: Que la jurisprudencia ya ha aceptado que pueden reclamar indemnizaciones por daño moral todos aquellos en quienes ha repercutido el hecho dañoso, acreditando la lesión de sentimientos o apegos.²

SÉPTIMO: Que en caso de autos, la parte demandada ha sostenido, como excepción, que el demandante ya ha sido indemnizado integralmente.

OCTAVO: Que al respecto, las Leyes N°19.123 y N°19.980 favorecieron a hijos, cónyuges y padres, disponiendo compensaciones económicas y otros beneficios sociales, lo que ha constituido un serio esfuerzo para las arcas fiscales. Sin embargo, estas reparaciones satisfactivas que emanan de los Principios y Directrices fijados por las Naciones Unidas en el año 2005, son estándares mínimos de reparación en su aceptación genérica, que están dirigidos a dar cuenta de constricción pública y apoyo inmediato a quienes habitualmente dependen de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pero que no quedan agotados allí, al punto, que incluso la Corte Interamericana ha sostenido que las reprobaciones pecuniarias pueden ser reclamadas al Estado, no obstante haber sido dirigidas acciones contra los responsables directos, por lo que parece atendible que no pueda impedirse, en primer lugar, el ejercicio de la acción de indemnización por daño moral de otro familiar directo, ni en segundo lugar, a los tribunales ordinarios de justicia en el análisis del caso concreto considerarlas, más aún si las transgresiones que han dado origen a la pretensión reparatoria, se realizaron como acción de plan de gobierno contra civiles.

NOVENO: Que por lo demás, en el caso específico de que se trata, tampoco ha sido demostrada por la demandada que haya sido compensado el daño presuntamente generado, ni siquiera por acciones generales, ya que el solo hecho de haberse realizado por el Estado obras de carácter universal,

² Excma. C.S., 4 de agosto de 1933. Rev. T. 30 secc. 1°, pág. 524; C.S., 14 de diciembre de 1983, Rev. T.80, secc. 1°, pág. 128; C.A. de Santiago, 11 de julio de 1991, Rev.88, secc. 4°, pág. 88.



no conlleva necesariamente la mitigación individual de cada uno de los afectados.

DÉCIMO: Que como defensa final se ha señalado por la demandada que la acción indemnizatoria se encuentra prescrita, se estimara que el plazo debe contarse desde el retorno del gobierno democrático o desde el Informe de Verdad y Reconciliación, los 4 años que prescribe el artículo 2332 del Código Civil o incluso los 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo legal, habrían transcurrido largamente hasta la fecha de la notificación de la presente demanda civil, al Fisco de Chile, ocurrido el 28 de enero de 2020,.

UNDÉCIMO: Que lo anterior sería de este modo si se atendiera a las normas de derecho privado, ya que en efecto desde la mirada positivista de resguardo del derecho de propiedad y la libre circulación de los bienes, es decir, desde la protección patrimonial, tanto al Fisco como a los privados, deben ser tratados en igualdad de condiciones y aplicársele la institución de la prescripción para adquirir bienes y extinguir deudas. Así lo señaló el propio Bello en el Mensaje del Código Civil, cuando expresa “Innovaciones no menos favorables a la seguridad de las posesiones y al crédito encontraréis en el título *De la Prescripción*”.

DUODÉCIMO: Que, sin embargo lo indicado, Chile forma parte de una comunidad internacional que ha establecido no solamente *concluir* en los instrumentos internacionales que los rigen, un beneficio mutuo como Estados contratantes, sino con un objeto y fin determinado, cual es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independiente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estado, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción (...)”³. Lo anterior implica establecer en la base del análisis y aplicación del concepto de responsabilidad a la víctima y al principio Pro Persona, esto es, debiendo “preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue una mayor protección a los derechos de la persona, independientemente si

³ Corte IDH. OC-2/82, citado en Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Responsabilidad Internacional del Estado en la Jurisprudencia Internacional y la Experiencia Chilena”, Tomo XVII. Claudio Nash, pág. 12.



dicho norma se encuentra en un tratado internacional o en una disposición de derecho interno⁴”.

DÉCIMO TERCERO: Que en efecto las Naciones Unidas aprobaron, en el año 2005, los Principios y Directrices relativos a los derechos de las víctimas en casos de violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, señalando que debe darse a las víctimas una reparación plena y efectiva, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.

DÉCIMO CUARTO: Que entonces el imperativo de protección y reparación en casos de violación a los derechos humanos emana del derecho internacional y es un principio del Derecho Internacional Público “aplicable directamente en el sistema normativo nacional frente al incumplimiento de obligaciones internacionales y posee una base normativa de rango superior a la ley civil”⁵.

DÉCIMO QUINTO: Que la Constitución Política de la República en su artículo 5 inciso 2° señala que “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse se su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

DÉCIMO SEXTO: Que los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental establecen el principio de legalidad de los actos estatales, estableciendo expresamente el principio de legalidad de los actos estatales, estableciendo expresamente la nulidad de aquellos que se aparten del mandato constitucional -y por aplicación del artículo 5 de los Tratados Internacionales- generando responsabilidad y sanciones.

⁴ Op. Cit, pág. 13, cita propia de ponencia en el Centro de Estudios Constitucionales Universidad de Talca, septiembre de 2012.

⁵ “Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Responsabilidad Internacional del Estado en la Jurisprudencia Internacional y la Experiencia Chilena”, Tomo XVII. Claudio Nash Rojas, Pág. 134.



DÉCIMO SÉPTIMO: Que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, establece en su artículo 1º que éstos “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.

DÉCIMO OCTAVO: Que a su vez el Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra, señala en su artículo 29 que “las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una quiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones provistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. Los inculpadados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.”

A su vez, el artículo 130 expresa que “Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio.”



Y el artículo 131 establece “Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma y otra parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior”.

DÉCIMO NOVENO: Que la Convención Americana de los Derechos del Hombre en su artículo 1 prescribe que “Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

VIGÉSIMO: Que por último, la Convención de Viena sobre los Derecho de los Tratados, indica en su artículo 27 en cuanto al derecho interno y la observancia de los tratados, que “Una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que la obligación de reparación íntegra entonces emana de la aplicación preferente al derecho internacional de los derechos humanos para cumplir los compromisos que el Estado chileno ha contraído y aplicar dichos tratados de buena fe⁶. Normas internacionales que son de “aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían aludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno y que invoca el Consejo de Defensa del Estado en resguardo de los intereses fiscales (...)”⁷.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en este caso se trata entonces de un crimen de lesa humanidad en que las acciones de reparación integral no han prescrito, puesto que la condición de imprescriptibilidad de la acción

⁶ Op. Cit. Pág. 161

⁷ Caso Álvaro Corvalán Castilla con Fisco de Chile.



indemnizatoria en este caso, emana de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos a la luz de los principios generales del derecho internacional que tiene rango supra legal, por aplicación del artículo 5° de la Constitución Política de la República, ya citado; sin que pueda invocarse derecho interno de menor jerarquía para desatenderlas. Por lo cual también las alegaciones principal y subsidiaria de prescripción de la acción de responsabilidad.

VIGÉSIMO TERCERO: Que conforme se prueba del certificado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, acompañado por el demandante, se da por acreditado que las acciones delictuales fueron cometidas por agentes del Estado señalando que “murió en las circunstancias que se detallan en el tomo 2, volumen 1 página 1003, del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”; su actuar es una contravención directa a las normas del derecho internacional y los principios constitucionales de los artículo 6 y 7.

VIGÉSIMO CUARTO: Que el artículo 38 de la Constitución Política de la República señala que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

VIGÉSIMO QUINTO: Que de esta manera, encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención forzada y posterior suicidio de la víctima, no habría tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, sólo queda dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los hechos relatados, padre de los demandantes de autos.



VIGÉSIMO SEXTO: Que la responsabilidad trae consigo la indemnización de los perjuicios causados, reparación que se ha solicitado en relación al daño moral sufrido por don Cristian Salvador Silva Olguín.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que como se dijo se ha desechado la alegación de haber sido reparado el mal con la ejecución de programas y compensaciones simbólicas, porque no ha tenido como beneficiarios particulares a los demandantes, como ya fue expuesto.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que para acreditar el daño moral sufrido se tendrá en cuenta la prueba testimonial, que da cuenta de las afectaciones emocionales que ha sufrido el demandante a lo largo de su vida, producto del asesinato de su padre el año 1987, lo que además impactó en su desarrollo psicosocial.

VIGÉSIMO NOVENO: Que en cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que el hecho que causa el agravio es definitivo, no puede repararse, así como las consecuencias que dicho hecho provocó en su vida familiar y desarrollo personal, de modo tal que aparece razonable fijar la suma de \$50.000.000, sin que aparezca que se trata de un enriquecimiento sin causa o un lucro improcedente como alegó también la demandada, cuyo razonamiento se desoye.

TRIGÉSIMO: Que la referida cantidad ordenada pagar, se hará con el reajuste del Índice de Precios al Consumidor e intereses corrientes desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, puesto que, en efecto, la obligación de indemnizar es declarada con la dictación de esta sentencia y el reajuste tiene como único objeto morigerar los efectos de la inflación y los intereses el retardo en el pago.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que por haber tenido motivo plausible para litigar, el Fisco no será condena en costas.

En consecuencia y visto además la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra; Convención Americana de Derechos Humanos; Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados; artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado; Leyes



Nº19.123 y Nº19.980; y, artículos 144, 170 y 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y de prescripción extintiva.

II.- Que acoge la demanda y se dispone que el Estado de Chile debe pagar como indemnización de perjuicios por daño moral a don Cristián Salvador Silva Olgún, la suma de \$50.000.000, con los reajustes que se indican en el considerando trigésimo.

III.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veintitrés.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QNMHXXBSMQW